

Cuadernos del Sur

Número 6



Octubre 1987

Tierra 
fuego
del

LA CRISIS DE HEGEMONIA EN SEMANA SANTA Y LAS ELECCIONES DE SETIEMBRE

César Altamira

Introducción

Transcurridos casi cuatro años desde diciembre de 1983, cualquier análisis del pasado inmediato y delineamiento de tendencias, no puede dejar de incorporar esa matriz que todo lo invade y contagia, la CRISIS, entendida ésta no solo en su aspecto más limitado como crisis económica, sino también en su acepción más general de degradación social, ruptura de los viejos bloques sociales, pérdida de las hegemonías, búsqueda de otras nuevas, eclosión de nuevos tipos de marginación, dilución del peso social de clases y sectores de clases, reacomodamientos en las estructuras de poder, etc.

La crisis ha significado también que políticas diversas y contradictorias hayan ocupado el escenario político nacional impulsadas por el mismo gobierno. En el ámbito sindical hemos visto desfilar desde la fracasada Ley de Reordenamiento Sindical, pasando por la administración Caseilla, hasta los acuerdos con el grupo de los "15" y el ministro Alderete; en el terreno económico, desde la política redistribucionista de Grinspun y su virtual moratoria de la deuda externa; al "heterodoxo" plan Austral y finalmente la ortodoxia fondomonetarista desde julio de 1987 hasta hoy; en el terreno de los derechos humanos desde los decretos de enjuiciamiento a las Juntas, la creación de la CONADEP y los juicios a militares sin eximientes, a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; del lenguaje hostil hacia la "patria financiera" a la nueva denominación de "capitanes de la industria" para luego incorporarlos como compañeros de ruta en el diseño de alianzas que se busca pergeñar entre el establishment industrial y financiero y el Estado.

Este panorama se cierra con otro dato no menos preocupante y ejemplificador: la compulsión a la repetición que presenta el país en algunos aspectos como son el retorno de los militares al escenario político desde Semana Santa y el rebrote inflacionario a partir de junio del '87, que nos revelan la existencia de profundos conflictos sociales no resueltos. Tanto el Terror de Estado como la inflación contribuyen a reponer la inseguridad social así como el miedo a un futuro incierto.

Pero la crisis también significa cuestionamiento de teorías y concepciones, de ideas largamente aceptadas y trastocamiento de los conceptos: así hoy se llama reactivación a lo que en otros momentos se hubiera designado como estancamiento crónico, al mismo tiempo que los análisis de

mediano y largo plazo desaparecen de los planteamientos mas generales. La indefinida prolongación de la misma ha engendrado la resignación, al mismo tiempo que socava las esperanzas de un futuro promisorio. Las expectativas sociales se encuentran hoy en su punto más bajo.

En este marco el Gobierno anuncia una vasta reforma orientada a la creación de un Estado moderno, capaz de atravesar la transición regulando la relación con los grupos de poder; las corporaciones pertenecientes al capital financiero, los militares, la iglesia, y finalmente la superrestructura sindical. Al mismo tiempo, demostrando iniciativa política ante una oposición que atina solo al acompañamiento reactivo, empuja una Reforma Constitucional, como pivote que apuntale la estabilidad institucional y presiona por el traslado de la Capital.

¿Cuáles son las posibilidades de concreción de estos proyectos? Los argentinos, ¿estamos destinados a permanecer como ciudadanos de cuarta en el mundo? o ¿la tierra prometida por el Gobierno es posible en un futuro no muy lejano?. Si esto es así ¿cuáles serán los costos sociales?. ¿Es posible consolidar la democracia?. Y en tal caso, ¿qué tipo de democracia?. ¿Qué actitud deben asumir las fuerzas de izquierda en estas condiciones?.

Lo que sigue no pretende dar respuesta a estos interrogantes, pero intenta auscultar las posibles líneas tendenciales por donde discurrirá la vida política del país.

1) Crisis económica: Todos los caminos conducen a Roma

A) El marco internacional: las rivalidades interimperialistas y el mercado mundial.

En la época actual del capitalismo, donde las interdependencias y las dependencias se imponen a la larga sobre las economías nacionales, la crisis económica mundial se yergue como un marco indiscutido de referencia. Más aún los procesos nacionales encuentran en ella sus limitaciones y/o restricciones, las más de las veces sumamente estrictas.

Mientras el país permanece atado al viejo modelo de integración mundial, el capitalismo a nivel internacional viene produciendo una verdadera reestructuración productiva, con el objetivo de salir de la crisis en la que está sumido, modificando así la vieja división internacional del trabajo. Al amparo de un proteccionismo selectivo por parte de los países centrales, se viene gestando la nueva correlación de fuerzas a nivel internacional con su consiguiente distribución de parcelas económicas, tales que aseguren, al compás de la incorporación de una nueva tecnología altamente moderna (automación "blanda", robotización), la recuperación de la productividad del capital y con ello de la alicaída tasa de ganancia.

En este proceso los países capitalistas, que perteneciendo al llamado Tercer Mundo presenten un desarrollo del capitalismo más avanzado, estarán probablemente llamados a ocupar un rol de productores fundamentales no solo de materias primas, sino también de determinados bienes industriales, sobre la base de la incorporación de nuevas tecnologías que les aseguren competitividad en el mercado mundial.

De esta manera el diagnóstico inicial –sustentado por numerosos teóricos económicos– de la especialización de los países del Norte en los productos industriales, y de los países del Sur en productos primarios, fue sometido a una dura prueba: en primer lugar por la industrialización del Tercer Mundo y su apertura hacia los mercados externos, pero también por la creciente actividad de los países industrializados en las actividades primarias, en especial agrícolas.

A más de una década de desenvolvimiento ininterrumpido de la crisis mundial no aparecen indicios de su resolución, puede decirse sí que hay una incentivación de los flujos de capital en una dirección Norte-Norte más que Norte-Sur, paralelamente se pueden identificar ciertas tendencias que no hacen más que exacerbar los ya agitados mercados internacionales:

La concentración de las inversiones de capital en los países altamente desarrollados va acompañada de una pérdida de peso relativo de las inversiones directas de origen estadounidense. Las disputas por los mercados agrícolas entre EE.UU. y la CEE. tiene su correlato en la disminución del comercio mundial de productos primarios y en la guerra de subsidios, la generación de excedentes y la caída de los precios agrícolas. Japón se transforma en el principal acreedor internacional en tanto que el creciente déficit comercial estadounidense se convierte en la principal fuente de conflictos. En síntesis agudización creciente de las contradicciones interimperialistas.

Lejos de suavizarse, las restricciones externas se han agudizado. El proteccionismo permanente, la baja de los precios internacionales de las materias primas, las dificultades crecientes en estos mercados, y los direcciones de capital hacia los países desarrollados, aunados a los flujos por el pago de la deuda externa, conforman un cuadro de restricciones externas importantes para la acumulación de capital que han agudizado el horizonte internacional. Bajo estas circunstancias el perfil de integración de la Argentina al mercado mundial resulta desdibujado y el país es arrojado a una posición inevitablemente marginal y subordinada.

B) El marco nacional: El agotamiento de un modelo

Más allá de la existencia y propagación de una crisis a nivel mundial, los marcos de acumulación nacionales contienen variables que vuelven a las crisis nacionales diferenciadas y específicas. La crisis mundial se transmite con intensidad y formas distintas a las economías, y el grado de

dependencia o vulnerabilidad externa de cada país está en último término determinado por las características internas de acumulación de capital, elementos donde en última instancia se debe auscultar para desentrañar las causas de la misma.

Por otra parte, a la división internacional del trabajo que los Estados Nacionales intentan modelar según sus intereses específicos, se superpone la división internacional del capital, organizado según las grandes firmas multinacionales. Es que frente a la internacionalización del capital –últimamente bajo la forma de capital mercancía y productivo–, los espacios de valorización nacionales se alzan como barreras objetivas para libre acumulación, lo cual genera una contradicción latente que desemboca en no pocos conflictos entre las estrategias adoptadas por los capitales individuales y las políticas conducidas por los Estados.

La apuesta a una salida (capitalista) de la crisis¹ –lo más seguro de gestarse en función de la correlación de fuerzas sociales– supone una necesaria reestructuración industrial que asiente el desarrollo económico sobre bases de acumulación mucho más próximas a un desarrollo intensivo que extensivo del capitalismo.

Es al compás de este proyecto, que estamos asistiendo al nacimiento de nuevas hegemonías sociales y políticas; proceso en el que el Gobierno renunció a ciertos contenidos ideológicos –propios del viejo radicalismo– que constituyan un lastre para asumir la cruda realidad de la crisis.

De esta manera fue despuntando un nuevo proyecto, que inacabado todavía, fue pomposamente llamado “modernización del Estado”, cuyos contornos se han ido delineando hasta sintetizar en la voluntad de la conformación de una burocracia orgánica de Estado, que administrando el Gobierno en nombre del “capital en general”, e independizándose de los avatares de la coyuntura, sea capaz de darle estabilidad a la hoy dominante forma del capital: el capital financiero. Nos encontramos en un momento de transición en la constitución de nuevas alianzas; el Estado, los sectores económicos que salieron fortalecidos del proceso económico anterior, gran burguesía monopólica argentina y las empresas transnacionales afincadas en el país.

Pero los caminos resultan difíciles de transitar. Luego de cuatro años de gobierno y más de dos de Austral, la Argentina no ha podido erradicar la inflación; ésta recrudece en cuanto se sueltan mínimamente las válvulas económicas; el remedio austral no impide que la enfermedad inflacionaria haga metástasis. Por otro lado aunque se buscó impulsar el crecimiento, fue mucho más el tiempo dedicado a la estabilidad de los precios que el brindado al desarrollo. Si bien el gobierno pudo esgrimir con orgullo que el PBI había crecido durante 1986, al igual que la producción industrial y la inversión bruta interna, esto se logró con un alto costo social.

No se trata solo de las altas tasas de desocupación abierta y encubierta y de la marginalidad creciente, los indicadores oficiales muestran también

crecimiento de los ritmos de producción, aumentos importantes de la productividad por obrero ocupado y por hora trabajada, lo que va acompañado por un aumento del despotismo en la fábrica y la arbitrariedad patronal con el desconocimiento de comisiones internas y cuerpos de delegado, en suma, deterioro generalizado de las condiciones de venta de la fuerza de trabajo.

Es fácil así concluir que el reverso económico del desarrollo capitalista se condensa en una mayor tasa de explotación. El obrero hoy produce más, pero como su salario se deprecia, debe prolongar su jornada laboral para poder mantener su salario real. Si por un lado la prolongación de la jornada de trabajo es un índice de extracción de plusvalía absoluta, la mayor productividad horaria, nos indica una aumento de la plusvalía relativa.

La aceleración inflacionaria –desde junio del 87– se ve agravada por la frecuencia de repetición de los ciclos de reactivación, y el aumento del piso inflacionario en cada nuevo ciclo de la misma. Esta situación que se prolonga desde hace ya tiempo –abril de 1986–, nos lleva a concluir que el gobierno no ha derrotado a la inflación; que los aspectos que hacen a su vitalidad --déficit fiscal, pujas distributivas y competitividad internacional– no han sido erradicados.

Lo que está en juego a partir de febrero de 1987 es el *agotamiento de una modalidad de política económica*; la de las pautas, la de la voluntad de inducir desde “arriba” los cambios graduales en la economía. Los sucesivos vaivenes inflacionarios no solo han cuestionado esa modalidad, sino que han demostrado, al mismo tiempo, la incapacidad de la política monetaria para provocar por sí misma la buscada estabilidad. Solo logra calmar el rebrote, pero oficia de detonante para el próximo ciclo expansivo de la inflación.

Cada vez que se produjo la escalada inflacionaria el gobierno echó mano a la misma receta: el Banco central colocaba a la economía en el cepo monetario con el objeto de calmar las energías de la demanda global, reducir así la actividad económica, induciendo los precios a la calma y controlando el dólar marginal con la suba de la tasa de interés.

Todos los caminos conducen a Roma; todos llevan al manejo de la *tasa de interés* y con ello a la variable fundamental monetarista para acorralar a la inflación.

Los resultados que se obtuvieron fueron languideciendo con el tiempo; los efectos de la reducción inflacionaria se agotaban cada vez más rápidamente al mismo tiempo que el piso del que se partía para nuevos impulsos inflacionarios era cada vez mayor.

Si a este cuadro le sumamos la indisciplina social del empresariado argentino sin distinción de sectores y tamaño –expresada en la constante apuesta a la especulación y a la bicicleta financiera-- arribamos forzadamente a la *ingobernabilidad de la economía en época de crisis*, mientras

se recurra exclusivamente al control de las variables económicas. Entram-pado en su propio accionar, sin advertir la necesidad de "politizar" la economía, el gobierno ha quedado encerrado en el campo económico. Al igual que en el frente militar se convierte en víctima de su propia política.

El nuevo discurso económico, que hace su aparición en julio de este año, se vertebró sobre objetivos más estructurales basado en tres pilares: a) la integración al mercado mundial; b) la desregulación económica, y c) la racionalidad en el manejo de la economía. Estas tres verdades, ciertamente mascarares de proa, se aplican inmediatamente a la política estatal. No se trata de más Estado o menos Estado sino de un ESTADO DISTINTO. La crisis lleva a cabo su obra (regeneración del capital) a través de la mediación estatal. La política económica estatal se transforma en el devenir de la crisis; el blanco máspreciado se ubica en el Estado-benefactor. Este se constituye en uno de los factotum de la persistencia de la crisis.

La desregulación estatal es presentada como contracara de la apertura de la economía; la transparencia de los mercados distorsionados, precisamente, por la excesiva intervención estatal, constituye uno de los requisitos indispensables de la "nueva" teoría. Entra en escena lo que se ha dado en llamar el "uso capitalista de la crisis"; los distintos mercados— y entre ellos el de la fuerza de trabajo— quedan regidos en forma estricta por la ley de la oferta y la demanda y de esta manera los asalariados son empujados violentamente a la marginación.

El círculo se cierra con la aparición del ya conocido cuello de botella de la economía argentina; el estrangulamiento a que conduce la reducción de los saldos de la balanza comercial, ante un crecimiento industrial para hacer frente a mayores importaciones. Esta cíclica crisis nacional fue resuelta anteriormente con mayores créditos internacionales; pero hoy nos prestan para devolver los intereses, no para mejorar nuestra balanza de pagos, lo que agudiza el frente externo.

Si con anterioridad a las elecciones primaba la idea de que el esquema económico sería redefinido orientándolo hacia un ajuste mayor de la economía —tal como lo adelantara Sourrouille en su discurso "Por un crecimiento diferente"— el resultado de las mismas contribuye a debilitar esa hipótesis. El castigo electoral es harto elocuente; ¿estará dispuesto el radicalismo a profundizar su plan de modernización capitalista y por tanto retomar la política de confrontación ante esta nueva correlación política? Así setiembre, no solo trae el eclipse de los "operadores" políticos sino también negros nubarrones en el horizonte económico. ¿Cuáles son las posibilidades de implementación de un plan económico de otro tipo?. ¿Puede afirmarse su existencia, ante las escasas diferencias que existen hoy entre radicales y peronistas, en este terreno?

La política répercute sobre la economía en forma violenta tornándola más ingobernable aún; a los fenómenos estructurales —la crisis histórica

argentina— se añade esta nueva correlación política, cuyo marco general es el que debemos auscultar ahora.

2) La hegemonía nacional.

En busca de una nueva cultura política

En nuestro país, la última dictadura militar aceleró la articulación entre los grupos económicos más importantes vinculados a la producción y a la banca privada, al mismo tiempo que la política económica hacia desaparecer del mercado importantes franjas del sector productivo nacional. El capital financiero convalidaba en la realidad su condición de forma hegemónica histórica del capital, mientras que el proceso de concentración y centralización de capital operado en los últimos 10 años, consolidaba socialmente su carácter dominante.

Pero el hecho de que una fracción social dominante se alce como clase “dirigente” entre sus pares no significa que se constituya en *dirección política* de la sociedad. Necesita alcanzar previamente la *hegemonía* no solo entre sus iguales, sino también en relación a la sociedad en general.

En efecto, en la sociedad capitalista el poder está en manos bien de la clase dominante, bien de la fracción de esta clase que hegemoniza el bloque en el poder; la clase dominante es quién hegemoniza al conjunto de la sociedad y esta hegemonía se produce y reproduce constantemente —entre otras formas— en la relación que se establece entre el Estado y la sociedad civil.

La problemática de la hegemonía remite a la función ideológica del Estado, sin confundirse con ella. Así, esta función consiste en legitimar la explotación de clase ocultándola; en hacer primar el interés “general” por encima de los intereses en lucha. Pero la hegemonía no solo incorpora las luchas establecidas entre las distintas fracciones de la clase dominante para utilizar los resortes del Estado y hacer valer sus intereses específicos, sino también los distintos caminos de lucha entre las clases dominantes y las dominadas, a fin de imponer sus intereses estratégicos.

Se trata de una hegemonía, que en el enfoque gramsciano, se puede obtener por consenso o por coherción. Es precisamente a partir de esta doble posibilidad de convalidación de las clases dominantes, que se expresa la forma de gobierno; democracia asociada al consenso; dictadura a la coherción.

Se trata de la integración política ideológica de las clases dominadas a los sistemas de dominación que responden a la nueva lógica de acumulación, mediada por el “conjunto complejo de instituciones, de ideologías, de prácticas y de agentes (entre los que encontramos a los intelectuales)”² que constituyen el aparato de hegemonía, entendido éste como el “instrumento” de legitimación consensual de la dominación de clase.

La dificultad para establecer la unidad interna de la burguesía, o la unidad política del bloque dominante, no es algo congénito, producto de la fragmentación estructural del capital, sino que es un fenómeno derivado de la *relación de fuerzas políticas dadas*, y que se establecen no solo al interior de las clases dominantes, sino también en el nivel general social, entre las clases dominantes y las dominadas. Esta concepción resulta de particular importancia para poder entender el actual proceso político argentino con posterioridad a las elecciones.

Si pudiéramos caracterizar a la crisis nacional en su acepción más general, esta tendría que ser calificada como de *crisis de hegemonía*. El carácter hegemónico que la gran burguesía financiera expresa en el seno de las clases dominantes, no encuentra su correlato político en la sociedad. A falta de una fuerza política propia que represente en la sociedad civil sus intereses, ha tenido que recurrir sistemáticamente a la coacción, como forma de garantizar su dominación en forma estable. La crisis política actual —que resurge con fuerza con posterioridad a las elecciones— se condensa pues en la imposibilidad de resolver la cuestión política de la hegemonía y por tanto la integración política ideológica de las clases dominadas a los sistemas de dominación que responden a la nueva lógica de acumulación.

Es que el proceso que lideró el peronismo —en el período 45-55— dio lugar a la formación de un bloque de poder hegemoneizado por la burguesía nacional ligada a la producción de medios de consumo y de medios de producción para medios de consumo. Bloque que se edificó sobre un consenso social asentado en ideas fuerzas tales como mercado interno, redistribución del ingreso (justicia social), industria nacional (soberanía económica). Estado benefactor y subsidiador (independencia política), que amalgamaron una cultura política de fuerte contenido nacionalista, hoy subsistente a la luz del resultado eleccionario. Pero la crisis desatada desde los '60 no solo significó la ruptura del bloque —más allá de los intentos vanos de reconstrucción del mismo en el período 73-76—, sino la pérdida de legitimación de la burguesía ante las clases dominadas; se generó un cuestionamiento progresivamente “orgánico” de las clases dominadas respecto de las instituciones y valores tradicionales del sistema de dominación. El consenso social alcanzado durante los '50 languideció y fué suplantado por una práctica social contestataria de masas en ascenso.

Así es como la gran burguesía financiera argentina, desde mediados de los '60, se recostó sistemáticamente sobre la burocracia militar, como forma corporativa de poder, que le garantizara el ejercicio de su dominación.

Pero esta cohabitación fue una y otra vez desarticulada al amparo de un formidable proceso de movilización de masas iniciado también por la misma fecha y que habría de terminar amordazado y fuertemente golpeado por el Terror de Estado.

Así, el proceso de Reorganización Nacional habría de cambiar las reglas del juego; el movimiento de masas luego del mismo no representa el peligro social de otras épocas y de este modo posibilita recrear una hegemonía y sentar las bases de una dominación más duradera.

Pese a ello, la dictadura militar fue incapaz de mantener el equilibrio político y terminó víctima de la propia maquinaria de Terror de Estado. Pudo mucho más la derrota de Malvinas, y las contradicciones internas generadas en las estructuras de poder —más próximas a la corrupción que a diferencias políticas— que las tibias movilizaciones populares para provocar el retiro de los militares. Las elecciones de 1983 no hicieron otra cosa que confirmar esta lectura política; el consenso obtenido en las urnas no fue producto de un cuadro movilizatorio, sino más bien el resultado inevitable de una sociedad atemorizada y replegada sobre sí misma.

Con el desmoronamiento del bloque de poder anterior y con un movimiento popular vapuleado por la crisis, el radicalismo tardó 18 meses para comenzar la construcción de un nuevo bloque de poder que asegurara la estabilidad institucional y garantizara la concreción de la hegemonía perdida. *El alfonsinismo representa la búsqueda de un consenso social funcional a la gran burguesía financiera*, que trata a la vez de evitar la repetición de los movimientos de masas que en la década de los '60-70, hicieron fracasar otros intentos de recomposición.

Luego del Terror de Estado, con un movimiento social centrifugado y a la deriva y con una dinámica de masas debilitada, la construcción, reconstrucción de cualquier hegemonía y bloque de poder parece transcurrir mucho más por los caminos superestructurales que por las fábricas y los barrios.

Conciente de este cuadro desmovilizatorio, el alfonsinismo sorprende a la oposición política demostrando una inusual iniciativa para tejer las nuevas alianzas en los círculos de poder, alianzas que tiene como parte integrante no a los movimientos de masas, sino a las burocracias de distinto signo; militar, empresarial, sindical e inclusive político. Cualquier movilización del tipo que sea, por el contrario, afecta profundamente la posibilidad de concreción de estos pactos burocráticos.

La política oficial transcurre por dos andariveles persiguiendo la recomposición de la hegemonía perdida. Este doble juego se propone por un lado garantizar esa hegemonía en la sociedad civil sobre la base de un discurso que permita la consolidación de una *cultura política de nuevo tipo*; los frecuentes llamados de Alfonsín a apuntalar una *cultura del esfuerzo*, una *ética de la solidaridad* y la *modernización*, así como el rescatar la memoria histórica de la generación del '80, se conforman como la búsqueda de mecanismos consensuales que recompongan la dominación perdida. Por otro lado los esfuerzos dedicados a tejer laboriosamente las nuevas alianzas con las corporaciones de poder, apuntan a consolidar en el terreno de la superestructura el bloque de poder que lidere la salida de la crisis política.

Semana Santa: La autonomía del autoritarismo

Es sobre este trasfondo de negociación interburocrática que se gesta la crisis de Semana Santa.

La hegemonía significa, en primera instancia, dirección, aceptación de un cierto liderazgo. En el sentido más general este liderazgo (de una fracción dominante) implica la aceptación por parte del conjunto de las clases dominadas del interés general de la nación; pero es también el reconocimiento por parte de sus pares de la capacidad de dirección política y orientación del proyecto global depositado en una fracción de la burguesía; aquella que expresa y realiza de la mejor manera posible el interés estratégico del conjunto de las clases dominantes en una coyuntura particular.

Así la rebelión militar demostró que las FFAA no estaban dispuestas a disciplinarse al poder político emanado del gobierno y que la consolidación de la democracia dependerá en última instancia de los lugares posibles a ceder y aceptados por los militares en el terreno del poder.

Semana Santa expresa las dificultades en las negociaciones para la incorporación de las Fuerzas Armadas a la nueva estructura de poder que se está delineando; juego en el que el alfonsinismo oficia de ariete entre la sociedad civil y la sociedad militar, desarrollando enormes esfuerzos para superar el abismo producido en la sociedad y profundizado con posterioridad al conocimiento-reconocimiento del Terror de Estado expresado en el "Nunca más"

Estas dificultades se asientan en el hecho de que los militares exigen una cuota de poder que tiene mucho más que ver con una historia pasada que con un presente de repudio. Su consustanciación con la Doctrina de la Seguridad Nacional los hace aparecer como el último reaseguro del sistema, los legitima para actuar en el plano interno y los proyecta potencialmente hacia el control del aparato estatal; los induce a considerar que sus espacios políticos son reducidos y motiva para avanzar en el control de la producción estratégica y en el manejo de la política exterior del Estado. Todo este cúmulo de convalidaciones exigen previamente un consentimiento social; su reivindicación como tal, el reconocimiento de presuntos salvadores de la patria en la guerra contra el "demonio" marxista. De ahí que el fin último perseguido se condense en la amnistía para los comandantes.

Es este destino el que se jugaba en Semana Santa; no se dirimía una perspectiva inmediata de ruptura institucional, sino más bien la recuperación de espacios políticos perdidos, con el objeto de alcanzar posiciones más favorables a la hora de las negociaciones. Es que la falta de consenso internacional aunada al hecho de la reciente experiencia política de la sociedad alejaba toda posibilidad de golpe.

Pero al mismo tiempo, las dificultades que pueden aparecer para asegurar una definitiva integración de las FFAA al bloque de poder contri-

buyen a profundizar peligrosamente la separación hoy existente entre los campos consensuales y de coherción que necesariamente deben ser centralizados en el Estado. En el vértice de la crisis de Pascuas se encuentra la temida autonomización que puede alcanzar la forma coherciva de la forma consensual. En el límite esta separación puede concluir en una autonomía absoluta del aparato cohercivo con las consiguientes consecuencias sociales.

Todo parece indicar que si bien las intenciones inmediatas no son de ruptura constitucional, no la excluyen en un futuro mediato; sus avances o posibilidades de concreción tendrán que ver con las dificultades que el mismo proyecto conlleva; con el despertar de fuertes movilizaciones que pongan en peligro la concreción de la hegemonía; bien que con obstáculos en la negociaciones interburocráticas.

El Gobierno perdió tiempos preciosos para encarar una verdadera reforma militar que fortaleciera la transición democrática. En realidad nunca existió una política hacia los uniformados que asegurara su integración en el plano de las estructuras de poder.

Si pudiéramos mencionar un común denominador en la política desarrollada por el alfonsinismo para la concreción de los pactos burocráticos tendríarnos que concluir que su previo fracaso lo arrojó a la política de lo posible y de ahí a la adhesión a políticas no deseadas. Así si en el terreno sindical la alianza con los “15” reconoce como antecedente a la ley Mucci, la Ley de Obediencia Debida se reconoce en el fracaso de la autodepuración y la autonomía judicial no deseada de los primeros fallos.

Desde un punto de vista político más concreto el gobierno asentó su política con relación a las FFAA sobre dos caminos: por un lado el de los juicios por violación a los derechos humanos; por otro la búsqueda de reencauzar a las mismas sobre la base de la racionalidad burocrática como actor social. Si el primero tuvo que ver con un trasfondo de correlación de fuerzas, la racionalidad quedó librada más al juego del tiempo que a actitudes reales que provocarán su reencauzamiento. Se apostaba tras ello a una política ingenua, donde el Estado quedaba relegado como árbitro de los conflictos mientras los propios actores trataban de resolver sus contradicciones. El resultado fue otro; la autodepuración exacerbó el nivel de autonomización que habían alcanzado durante el Proceso.

Este tratamiento “departamentalizado” de los conflictos de cada burocracia, si por un lado facilitaba su “administración”, por otro impedía su integración. Esta carencia estalló en Semana Santa. Sus resultados son conocidos.

El gobierno trata de reconstruir espacios de contención política para los distintos factores de poder con el objeto de recortar los niveles de autonomización burocráticos. La *reforma estatal*, objetivo tan caro para el alfonsinismo, trabaja afanosamente por recomponer las recámaras del Estado a fin de producir la funcionalidad que requiere la cohabitabilidad

en el Poder. No solo se trata de la integración de las corporaciones políticas, militares y empresariales, sino también y con especial dedicación las cúpulas sindicales.

El intento de cambiar las reglas del juego con el objeto de poder garantizar la hegemonía perdida, supone un cambio del escenario donde se producirá la cohabitabilidad en el poder. Este verdadero trasfondo se oculta, aparece mimetizado tras la idea del estado como "representante" del conjunto de la sociedad; el discurso alfonsinista contribuye a reafirmar esa apariencia. En efecto, ¿quién puede oponerse, desde el sentido común, a la consecución de un estado eficiente, moderno, a tono con las necesidades sociales de hoy en día?. El Estado se aparece así como el organizador de la sociedad, y en ese momento se constituye en el defensor del orden y agente del "interés general" de la misma. La versión de un *Estado fetichizado* se ha consumado.

¿Democracia participativa o resistencia democrática?

Pero si la crisis no puede ser pensada independientemente del Estado, en tanto éste es inherente a la génesis y desarrollo del capital, toda explicación pertinente sobre la probable resolución de la misma, debe incorporar de principio a fin la presencia activa y orgánica del Estado en su devenir. Concebir al Estado en una relación de exterioridad frente a la economía y frente a la Sociedad conduce a la justificación teórica del reformismo y a la imposibilidad de pensar en términos histórico-materialistas la dominación de clase. Por el contrario, debe ser deducido a partir del análisis del proceso social de producción y reproducción; como un aspecto de la relación social.

Pero el Estado no es solamente esta abstracción analítica. Lo constituyen un conjunto de aparatos e instituciones, que podríamos caracterizarlos como "un momento objetivado del proceso global de producción y circulación de poder"³. Es a través de ellos y mediada por estas instituciones —instancias de poder— que se realiza la dinámica de la gobernabilidad de la sociedad. Estas se van adaptando a la funcionalidad requerida por las distintas formas de "intervención" del estado, así como a las modalidades de las nuevas manifestaciones hegemónicas.

Pero lo que está en juego es la *manera de intervención del Estado*; es que el desarrollo de una política económica de nuevo tipo exige también una intervención estatal distinta. Se trata en este caso de una nueva combinación de la apología del mercado y el autoritarismo estatal; "el desembrague económico del Estado que se propone no significa en absoluto su abstencionismo político"⁴

Las "intervenciones" del Estado cambian de objeto y de forma pero no cesan en absoluto. Así "como la crisis actual no es la crisis de las relaciones de mercancías, tampoco la crisis de las políticas keynesianas de

distinto tipo, no significa crisis de los estados burgueses”⁵ Se trata en este caso de imponer una solución política, bajo nuevas formas, funcionales al capital financiero.

Resta definir no solo las posibilidades de nuevos tipos de “intervención” del Estado sino también los espacios democráticos que este nuevo Estado es capaz de entregar y garantizar a la sociedad. Es que los aires democráticos se canalizan por los poros del mismo aparato estatal. ¿Qué tipo de democracia es posible contruir hoy en esta Argentina atravesada por una crisis tan violenta? ¿Podemos esperar la consolidación de espacios democráticos que se gesten a través de la participación del pueblo; o nos encontramos lejos de estos deseos, próximos a sociedades de comportamientos inducidos más autoritarios?.

Lo primero que se nos ocurre pensar es que el debate sobre la democracia posible en la década de los ’60 y ’70 se encuadraba en contextos totalmente distintos. El auge del movimiento de masas proponía la discusión y su respuesta les era exigida a los propios militantes desde el mismísimo centro de movilización. Es que el análisis de los tipos de democracia se situaba en el vértigo de las movilizaciones de masas que en su accionar iban consumiendo las formas de democracia presentes al mismo tiempo que iban exigiendo contenidos cada vez más radicales de la misma. El centro de la polémica se encontraba en el propio movimiento social. Hoy por el contrario, con un escenario diametralmente opuesto –con un movimiento social que ha extraviado su rumbo, sometido todavía a los traumas del Terror de Estado– la reflexión teórica y las propuestas prácticas discurren por otros canales; los de la superestructura del poder político. La suerte de la democracia parece depender no ya del juego de contradicciones políticas y sociales, de los antagonismos de clase, sino de los manejos interburocráticos gestados en la antesala del poder político; tras ellos los intentos de generación de una nueva cultura política que potencie el disenso en paz, la convivencia política pacífica, como formas permanentes y renovadas de disolver las tensiones que produjeron en el pasado enfrentamientos terribles.

Pero los hechos sociales tienen la inmensa cualidad de desmistificar las creencias y desnudar las teorías tan trabajosamente construidas. Si antes del 19 de abril era posible apostar aunque más no fuere ingenuamente al establecimiento de democracias participativas, Semana Santa destrozó esa ilusión. Dió al traste con la utopía tan difundida en círculos socialdemócratas y de izquierda de nuevo tipo⁶, sobre la posibilidad de gestar democracias con grados de participación popular importante en esta etapa del desarrollo del capitalismo, idea que supone la autonomización de lo político frente al espacio económico. Esta ilusión se basa en considerar al mercado de la política general como el único ámbito válido de análisis, donde los individuos, incluidos los trabajadores “hacen” la política como unidades indiferenciadas e “iguales”; así de esta

manera la política los equipara, ignorando la terrible desigualdad económica con que son paridos en esta sociedad y estampada en el ámbito de la producción, corazón de la explotación capitalista. Es que si por un lado, en el terreno más general, cualquier salida posible a la crisis requiere el ejercicio de la violencia capitalista, lo que impide ensanchar la geografía democrática, en el caso particular de la Argentina, los intentos de solucionar la crisis de hegemonía, que se concentran en los espacios superestructurales, cierran el camino al surgimiento de nuevos lugares en los que se potencie la participación de las masas. Se trata en todo caso de evitar el desarrollo de esos ámbitos que potencialmente puedan jaquear las negociaciones conseguidas en otros lugares. La tendencia subyacente como línea de fuerza es la de acercar la geografía política nacional a terrenos fronterizos a las democracias restringidas antes que participativas. Semana Santa en este sentido pronostica un quiebre político. Si hasta ese momento las libertades que se gozaban se autosostenían sin necesidad de participación popular, el epílogo de la rebelión militar marca un abrupto corte. Se abre una nueva era política que podemos definir como de *resistencia democrática*, donde los espacios democráticos concedidos desde 1983, deberán ser defendidos, a riesgo de que se vayan reduciendo paulatinamente ante el avance de los vientos regresivos que requiere el logro de la hegemonía perdida. La coyuntura política expresa en última instancia la manera en como se manifiesta esa corriente subterránea que se impone por encima de la voluntad de los hombres. Es que las etapas de crisis generalizada del sistema se caracterizan por una anarquía también generalizada donde las fronteras entre los distintos campos se labilizan. En ese sentido las concesiones subsiguientes a las FFAA y la creciente participación en la sociedad civil de las mismas, conforman las nuevas exigencias de autoritarismo centralizado por el Estado, en tanto este se erige en conductor del proceso en nombre de la fracción hegemónica de la burguesía.

Las últimas movilizaciones populares del tipo de Ing. Budge, Dock Sud, Florencio Varela, como respuesta a una violencia que proviene desde el mismo Estado y en cierta forma alimentada por éste, se incorporan en la nueva dinámica social de defensa de los espacios democráticos.

Los idos de setiembre y la gobernabilidad

En este contexto político arribamos a las elecciones de setiembre. Si bien en ellas no estaba en juego la hegemonía en sí, estaban en disputa caminos distintos que permitan alcanzar logros firmes de estabilización. El alfonsinismo jugaba gran parte de su proyecto que tan trabajosamente había venido tejiendo en estos últimos dos años. Necesitaba de un fuerte espaldarazo a su gestión de generación de nuevos consensos sociales. La Reforma Constitucional, la Modernización del Estado, el afianzamiento

de las alianzas económicas y políticas alcanzadas, el mismo traslado de la Capital y por supuesto la continuidad de una política para el próximo sexenio se procesaba en el voto de primavera.

El justicialismo a su vez, necesitaba urgentemente de una convalidación social que le permitiera salir de la profunda crisis en que se encuentra desde el '83. Una nueva derrota electoral pudiera haber significado una verdadera diáspora política del movimiento que en otras épocas hegemonizó a la sociedad.

Ninguno de los partidos políticos mayoritarios cuestiona la hegemonía económica de la gran burguesía financiera. En todo caso se disputan su "representatividad" política, por lo que estas elecciones contribuían sustancialmente a definir la ponderación social de cada uno de ellos, evaluación que vuelve más transparente las negociaciones en la cima del poder.

El resultado eleccionario sorprendió a propios y extraños. Primaba más la idea de una convalidación de la hegemonía radical edificada sobre la crisis del peronismo, en contraste, el triunfo justicialista provoca un drástico cambio del mapa político del país, que sin duda repercutirá sobre las posibilidades de concretar el proyecto alfonsinista. Existe en ambas fuerzas un común denominador asentado en el convencimiento de que no se trata de propugnar soluciones unilaterales tendientes a eliminar la lucha entre las distintas fracciones del capital, sino más bien de encontrar un sólido camino que permita la integración pasiva al "nuevo" desarrollo capitalista del sector social, enemigo potencial de este proceso, el movimiento obrero y los sectores populares. En este sentido la funcionalidad peronista supera largamente a la todavía escasa representatividad obrera radical, al mismo tiempo que esta todavía importante ascendencia potencia su capacidad negociadora y "acerca" a las masas peronistas, en términos de disponibilidad objetiva, a dirimir los conflictos corporativos.

En términos de la racionalidad capitalista, el triunfo peronista objetivamente retraza la posibilidad de desarrollo, en tanto se encuentra atado todavía a viejos conceptos de acumulación, propios de una época pasada y no de un presente de crisis; no han sido arriadas las banderas redistribucionistas ni tampoco el acento en el mercado interno y subsiste la idea de un desarrollo armónico con el capital nacional. En este aspecto, el radicalismo ha dado sobradas muestras de superación de viejos lastres ideológicos avanzando hacia una propuesta de cultura política de nuevo tipo ya apuntada. Cierto es también que el justicialismo, en aras de asemejarse a su similar político, ha producido también algunas transformaciones en su discurso. Así, al disenso en paz del radicalismo, le opone la "concertación y el acuerdo económico social" como instrumento que permita un "crecimiento sin conflictos"; a la cultura del esfuerzo la "recuperación del trabajo" como "eje ético político"⁷

La derrota del oficialismo constituye la contracara de la *reacción* de

una sociedad *a asumir un consenso político* que apunte a un modelo de desarrollo capitalista de otras características.

El voto opositor no significa el rechazo global a los enunciados de la propuesta oficial, sino más bien el disenso frente a los resultados de una política económica que conlleva altos costos sociales. Es también en este sentido que recoge el desencanto popular por una política, que en poco más de tres años, vio trasmutarse la *ética* —tan cara a los radicales— del juicio a los comandantes a la ley de la obediencia debida; de la denuncia del pacto sindico-militar a la consagración de sus protagonistas como pilares necesarios a la consolidación de la democracia; de los ataques a la patria financiera a la alegre entrega del Estado a los capitales de la industria.

Todo esto contribuyó a que Cafiero, sin proponérselo (?), representara en muchos casos más que un candidato provincial un referente nacional opositor, lo que le permitió al peronismo la canalización de los votos del disenso. Más que el apoyo a un programa, el peronismo atrajo el enojo coyuntural de amplios sectores de la población, los mismos que en el '83 optaron por la propuesta radical.

El desequilibrio provocado por las elecciones pues, proyecta un futuro político nacional atravesado por una *constante negociación-política* lo que sin duda dificulta la *gobernabilidad del sistema* en época de crisis sin hegemonías consumadas, al mismo tiempo que apunta a los bolsones de autoritarismo. Es que se trata de remontar una crisis política, que se desarrolla con un trasfondo de crisis económica estructural y con la que coexiste temporalmente: crisis política que significa --como lo demuestran las últimas elecciones— inestabilidad, precariedad, y fragilidad en las alianzas de clases y bloques de poder, deficiencias de la hegemonías políticas y de recursos de legitimación de la fracción política “dirigente” crisis política de las clases populares y desarticulación e ineficiencia de los aparatos del Estado.

El objetivo último es cerrar el hiato abierto entre sociedad civil y Estado. Este es el problema sustantivo.

Que la dirigencia política logre su objetivo, dependerá de muchos factores, entre ellos, de la acción que podamos establecer en pos de la recomposición de un movimiento popular sobre nuevas bases políticas, capaz de despertar una nueva vocación de poder en torno a la utopía de una transformación profunda y verdadera de nuestra sociedad.

Buenos Aires, Setiembre de 1987

¹ Para una caracterización de la crisis ver “País en transición y recomposición de la izquierda” C. Altamira, Cuadernos del Sur Nº 5.

² Gramsci y el Estado. Hacia una teoría materialista de la filosofía, Christine Buci-Glucksmann, Siglo XXI.

³ El Estado Burocrático Autoritario, Guillermo O'Donnell.

⁴ Estado y Poder en Marx, Suzanne de Brunhoff.

⁵ Ibid, Suzanne de Brunhoff.

⁶ Ver también en este aspecto “La izquierda debe plantearse el Poder”, Luis Rubio, Revista Militancia Nº 3.

⁷ “La propuesta económica justicialista”, Eduardo Amadeo, Informe Industrial, Julio '87